

Santiago, ocho de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT O-1.001-2019 RUC 1940224960-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se rechazó la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile y se dio lugar a la demanda de cobro de prestaciones laborales presentada por don Sebastián Rodrigo Gallegos Gallegos, don Héctor Eduardo Contreras Palma, don Mario Roberto Garrido Vicencio y don Marco Antonio Garrido Vicencio, en contra de la empresa contratista Constructora Ingenieros Asociados Limitada y del Ministerio de Obras Públicas, como dueño de la obra, a las que condenó a pagar, subsidiariamente, las sumas que se indican en lo resolutivo.

El Fisco de Chile presentó recurso de nulidad, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil veinte.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta, consiste en determinar “*el plazo de prescripción extintiva de las acciones que emanan de derechos laborales cuando la relación laboral se encuentra extinguida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo*”.

Para el recurrente, la correcta interpretación de la materia de derecho propuesta, se contiene en el fallo de contraste que acompaña, puesto que los dos primeros incisos del artículo 510 del Código del Trabajo, contienen plazos diferentes de prescripción, de dos años y seis meses, respectivamente, cuya aplicación dependerá de la actual vigencia de la relación laboral o si ya ha terminado. En este último caso, prosigue, el plazo se cuenta desde el día del



despido del trabajador, hecho que afectó a los demandantes el 21 de junio de 2018, y considerando el día de presentación de la demanda o su notificación, se debe concluir, igualmente, que la acción de cobro había prescrito, fundamento que estima coherente con el tenor del inciso final de la norma citada, que ordena la suspensión de los plazos de prescripción si el afectado inicia el procedimiento de reclamación administrativa ante la Inspección del Trabajo, sin que puedan exceder de un año y, además, con las reglas contenidas en los códigos que precedieron al actual, que invariablemente fijaron aquel término en seis meses; razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo en unificación de jurisprudencia que indica.

Tercero: Que para los efectos de resolver esta controversia, se deben considerar, en forma previa, los siguientes hechos y actuaciones procesales:

1.- Los demandantes se vincularon en régimen de subcontratación, para ejecutar labores de albañilería para la empresa contratista Constructora Ingenieros Asociados Limitada, en faenas licitadas por el Ministerio de Obras Públicas, relación que se extendió hasta el 21 de junio de 2018, cuando se declaró la liquidación concursal de aquélla.

2.- La empresa principal ejerció las facultades y obligaciones contenidas en el artículo 183 C del Código del Trabajo.

3.- La demanda fue ingresada al Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco el 17 de octubre de 2019 y notificada al dueño de la obra el día 22 siguiente.

Sobre la base de estos hechos y actuaciones procesales, la Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo del recurso de nulidad deducido por el Fisco de Chile, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en sus artículos 73, 163 bis y 510, y considerando correcta la interpretación dada por la judicatura de la instancia a estas normas, señaló que, *“conforme la literalidad del artículo en comento, resulta claro que este establece una distinción en el plazo de prescripción de las acciones en materia laboral atendiendo al origen de las obligaciones por las cuales se acciona. Así, el inciso primero regula el plazo de prescripción para perseguir el reconocimiento de los derechos que están reglados en el estatuto laboral, que fija en dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles, mientras que el inciso segundo regula el plazo para perseguir el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los actos y contratos diversos a los señalados en el inciso anterior, es decir aquellos que emanan de la voluntad de las partes”*, precisando, a continuación, que *“el mayor*



plazo establecido en el primer inciso, se explica porque los derechos ahí establecidos se encuentran consagrados en el Libro I del Código del Trabajo, específicamente, en los capítulos VI y VII en el caso de las remuneraciones y del feriado anual y, tienen el carácter de irrenunciables, mientras que los segundos corresponden a actos y contratos que las partes pueden celebrar libremente conforme al principio de la autonomía de la voluntad, esto es, en cuanto se respeten los mínimos legales”, de este modo, “habiéndose demandado por los actores indemnizaciones y compensaciones establecidas por el estatuto laboral, estas se sujetan al plazo referido en el artículo 510 inciso primero del mencionado cuerpo legal, de forma tal que, habiéndose determinado que la relación laboral culminó el 21 de junio de 2018 y, que la demanda fue presentada con fecha 17 de octubre de 2019, notificada al Fisco de Chile con fecha 22 de octubre de 2019, no queda sino concluir que el plazo referido no había transcurrido, por lo que necesariamente la excepción debió rechazarse”, declarando, por tanto, que “esta Corte estima que el Juez Ad quo no ha incurrido en la infracción de ley que se imputa por el recurrente, habiendo realizado una correcta interpretación de la normativa, que se coincide por lo demás de mejor manera con el carácter protector del trabajador de las normas del derecho laboral. Así, la sentencia en alzada no ha incurrido en la infracción del artículo 510 del Código Laboral”.

Cuarto: Que la parte recurrente ofreció a modo de contraste, una sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N°41.760-2017, de 7 de mayo de 2018, en la que se consideró, en lo pertinente, que “el predicamento postulado por la demandada yerra en la comprensión del instituto de la prescripción, desde que el artículo 510 del Código del Trabajo establece que ‘Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles’, para luego agregar, en el siguiente inciso, que ‘En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este Código prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios’. De este modo, debe distinguirse que el plazo es diferente según el contrato haya terminado o no, debiendo diferenciarse entre las prescripciones de los derechos y acciones mientras subsistente la relación laboral y cuando dicha relación termina. Si vigente el contrato, prescriben en el plazo de dos años contados desde la fecha que se hicieron exigibles, de manera que la acción por la cual se pretende la declaración de existencia de una relación laboral no le afecta término para su



ejercicio en cuanto vigente la misma, comenzando a correr el plazo de prescripción, una vez que se estima extinguida”.

Quinto: Que, habiéndose confrontado ambas decisiones, se advierte que concurre el supuesto de disparidad jurisprudencial relacionado con la materia de derecho propuesta, por lo que se debe decidir cuál de las divergentes prevalecerá.

Sexto: Que los dos primeros incisos del artículo 510 del Código del Trabajo, disponen: *“Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”.*

“En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este Código prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios”.

Como puede apreciarse, someten el ejercicio de las acciones judiciales a un plazo de prescripción diferente según si tienen por finalidad obtener el reconocimiento de derechos que están reglados en el estatuto laboral –dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles- o que surgen de los actos y contratos de que también trata –seis meses desde la terminación de los servicios-; diferencia que está dada porque los primeros tienen el carácter de irrenunciables y están consagrados en el Libro I del Código del Trabajo, específicamente, en los capítulos VI y VII en el caso de las remuneraciones y del feriado anual, respectivamente. Dicha característica está consagrada en forma expresa en los incisos segundo y tercero de su artículo 5, en la medida que permite la modificación de las cláusulas de los contratos individuales y colectivos, por mutuo consentimiento, en aquellas materias en que las partes pueden convenir libremente conforme al principio de la autonomía de la voluntad, esto es, en cuanto se respeten los mínimos legales, pues a través de ambos instrumentos de naturaleza laboral se pueden acordar distintas condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones, según las definiciones establecidas, respectivamente, en los artículos 7 y 344 del citado estatuto.

Séptimo: Que, en consecuencia, el artículo 510 del Código del Trabajo distingue claramente entre los mínimos predeterminados y las condiciones que las partes pueden convenir por sobre aquéllos, instituyendo para los primeros un plazo mayor de prescripción como modo de extinguir las acciones judiciales y para los segundos uno inferior, a saber, dos años y seis meses, respectivamente, conclusión corroborada de acuerdo con el alcance de la expresión *“En todo caso...”* que da inicio a la regulación de su inciso segundo, enfatizando que las



condiciones acordadas por las partes, es decir, aquellas que reconocen como origen la autonomía de la voluntad, prescriben en seis meses, contados desde la terminación de los servicios.

Octavo: Que, en tales condiciones, se advierte que la acción ejercida por los demandantes, se relacionaba con el cobro de sumas adeudadas por feriado legal y proporcional, y por indemnizaciones por falta del aviso previo y años de servicio, pretendiendo, de este modo, la compensación dineraria de derechos cuya fuente es la ley, por lo que la norma aplicable y que resuelve la controversia planteada por el demandado, según lo razonado, se contiene en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, que establece un plazo de dos años para declarar extinguida la acción por prescripción, que al momento de su interposición o notificación, permanecía vigente.

Noveno: Que, en ese contexto, sólo cabe concluir que la sentencia impugnada hizo un correcto uso de la normativa aplicable al caso, razón por la que, si bien se constata que discrepa con la de contraste, no configura la hipótesis prevista por la ley para que esta Corte unifique la jurisprudencia, porque se ajustó a derecho la argumentación que rechazó la excepción de prescripción, motivo suficiente para desestimar el arbitrio intentado.

Por lo reflexionado y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia de tres de septiembre de dos mil veinte dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Acordada con el **voto en contra** del ministro señor Mera, quien fue de opinión de acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, por las siguientes razones:

1° Que la controversia de derecho planteada, hace necesario determinar la correcta aplicación, en materia de prescripción, de los incisos primero y segundo del artículo 510 del Código del ramo, que distingue dos plazos que extinguen las acciones que el trabajador puede ejercer en contra del empleador, estableciendo su inciso primero que los derechos regidos por dicha codificación, prescriben en el plazo de dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles y, en seis meses, de acuerdo con su inciso segundo, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere el mismo código, contados desde la terminación de los servicios.



2° Que la distinción contenida en el aludido precepto, dice relación con la vigencia o extinción del vínculo laboral, así, el lapso prolongado de prescripción que prevé el inciso primero de la referida disposición, tiene como objetivo salvaguardar a los trabajadores que, procurando conservar su fuente laboral, no ejercen sus prerrogativas mientras se encuentran bajo subordinación y dependencia. En cambio, el inciso siguiente, fija un plazo de seis meses para ejercer las acciones correspondientes, una vez extinguida la relación laboral.

3° Que la interpretación señalada se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso final de la norma en estudio, que, tratando la suspensión de los plazos establecidos en sus tres primeros incisos, con ocasión de la interposición de un reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo respectiva y debidamente notificado, estatuye que el plazo seguirá corriendo una vez concluida la tramitación del mismo y que en ningún caso podrá exceder de un año contado desde el término de los servicios, ampliación, esta última, que importa un beneficio de mayor extensión al trabajador reclamante, sólo si se estima que su actividad procesal, una vez exonerado, debe ajustarse al lapso de seis meses, pues de lo contrario, la utilización de la vía administrativa siempre le resultaría perjudicial.

4° Que, por otra parte, hacer una disquisición entre acciones y derechos regidos por las leyes en esta materia para los efectos de determinar el plazo de prescripción, además de aparecer contrario a la naturaleza de la vinculación entre las partes, la que se encuentra íntegramente regulada, en sus mínimos inalterables, por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, puede conducir a que el cobro de una misma prestación esté sujeto a dos plazos distintos de extinción. Lo anterior, debido a que las prerrogativas contempladas en el Estatuto del Trabajo deben entenderse incorporadas en los contratos de tal naturaleza, aun cuando no se incluyan expresamente por las partes, las cuales, además, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden ampliar su extensión. Es así como, por ejemplo, en el caso del feriado anual, regulado en los artículos 67 y siguientes del Código del ramo, en el evento de haber sido aumentado contractualmente y, de aceptar que los derechos concedidos por la ley prescriben en dos años desde que se han hecho exigibles, tal sería el plazo de extinción para dicha prestación en cuanto a los mínimos referidos y, por lo pactado sobre dicha base, sólo podría reclamarse o hacerse valer durante el lapso de seis meses, situación que claramente se aparta de la recta lógica deóntica.



5° Que en consecuencia y según lo razonado, habiéndose producido el término de los servicios el 21 de junio de 2018 y la presentación de la demanda y notificación del recurrente, los días 17 y 22 de octubre de 2019, respectivamente, se debía concluir que el plazo de prescripción había transcurrido en exceso, y puesto que la decisión recurrida contraría esta conclusión, en concepto del disidente, el fallo impugnado incurrió en infracción a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, con influencia sustancial en lo dispositivo desde que fue condenado a pagar subsidiariamente determinadas sumas, a pesar que la acción para su cobro estaba prescrita, motivo suficiente para uniformar la jurisprudencia en el sentido propuesto por aquél.

Regístrese y archívese.

N°134.202-2020.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., Raúl Mera M., y Roberto Contreras O. No firman los ministros suplentes señores Mera y Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado ambos su periodo de suplencia. Santiago, ocho de abril de dos mil veintidós.



En Santiago, a ocho de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

